

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO  
DE BOGOTÁ D.C.**

**[j45cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j45cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co)**

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil veintidós

**Rad:** 11001310304520220033700  
**Accionante:** ANÍBAL ROJAS ÁLVAREZ  
**Accionada:** NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-  
POLICÍA NACIONAL-ARCHIVO.

Procede el despacho a resolver la acción de tutela de la referencia, previo el estudio de los siguientes,

### **I. ANTECEDENTES**

Como soporte fáctico de su solicitud, en síntesis, indica el señor Aníbal Rojas Álvarez, que mediante radicado GE2021-022896, previo el pago de los valores fijados por el área ARCHIVO DE POLICÍA NACIONAL, se solicitó información completa de los formatos requeridos por COLPENSIONES para acceder al bono pensional, sin que hasta la fecha y pese a múltiples reclamaciones haya sido posible acceder a dicha solicitud, lo que viene afectando al actor, quien cuenta con 71 años de edad y necesita definir su status pensional.

### **II. ACTUACIÓN PROCESAL**

1. Asumido el conocimiento de la acción por parte de esta Oficina Judicial se envió comunicación a la entidad accionada, para que ejerciera

el derecho de defensa y se pronunciará sobre los hechos base de esta acción y envíe a este estrado judicial copia de los documentos que guarden relación con la petición, acompañado de un informe detallado sobre los hechos de la presente acción.

2. En tiempo, la accionada solicitó se niegue el amparo deprecado por la accionante ya que se configuró un hecho superado, señalando que una vez fue notificada de la acción constitucional interpuesta, el Grupo de Información y Consulta del Área del Archivo General, procedió a dar respuesta a lo solicitado por la apoderada del actor a través del comunicado oficial No. GS-2022 029066-SEGEN del 25 de julio de 2022, enviándole certificación electrónica de tiempos laborados CETIL con consecutivo No. 202207800141397000990300 correspondiente al tiempo laborado en la Policía Nacional por el señor Rojas Álvarez, el cual puede ser consultado directamente en la Plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la entidad donde se encuentra realizando sus aportes, en este caso COLPENSIONES, en consecuencia esta certificación reemplaza 1,2, 3(A) y 3(B), situación que conlleva a que se haya configurado un hecho superado y por ello pide se niegue el amparo deprecado.

### **III. CONSIDERACIONES**

1. Acorde con la Constitución Política, el Estado Colombiano está instituido bajo un sistema social de derecho, lo cual implica que la organización del mismo debe estar sujeta a una serie de principios y reglas procesales que se encargan de crear y perfeccionar todo el ordenamiento jurídico; de esa manera, se limita y se controla el poder estatal con el fin de que los derechos del individuo se protejan y se realicen a partir de lo dispuesto en la propia Ley.

De esa forma, se establecen pues los principios y derechos constitucionales que irradian a todo el ordenamiento jurídico su espíritu garantista, que busca como fines últimos la protección y realización del individuo en el marco del Estado al que se encuentra asociado. Precisamente, uno de los mecanismos destinados a buscar la

materialización de los principios que componen el Estado Social de Derecho, es la acción de tutela consagrada por el artículo 86 de la Carta Magna como el instrumento idóneo para que toda persona logre la garantía y protección de sus derechos fundamentales cuando estos hayan sido vulnerados o sean amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular.

La finalidad última de este procedimiento especial es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que la amenaza que sobre él se cierne se llegue a configurar.

1.1. Como la acción objeto de pronunciamiento puede ser formulada por cualquier persona que considere vulnerados sus derechos fundamentales, como precisamente aquí ocurre con el señor Aníbal Rojas Álvarez quien instauró la acción por conducto de apoderada judicial y, por ser quien considera se le están vulnerando sus derechos ya que a pesar de que canceló las expensas para que le fuese expedida la certificación de tiempo de servicios laborados, no ha habido comunicación por parte de la accionada que le defina su situación, lo que le ha imposibilitado definir su status de pensionado.

1.2. Por su parte, la accionada se encuentra legitimada en la causa por pasiva por cuanto la misma es viable dirigirse contra toda autoridad pública, condición que ostenta la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL-ARCHIVO de quien se depreca la transgresión de derechos, de manera que se encuentra habilitada para resistir la acción.

1.3. La eficacia de la acción de tutela como medio de amparo superior halla su origen en la aplicación del principio de la inmediatez, presupuesto de procedencia, dado que el objetivo primordial de tal instrumento se encuentra en la protección actual, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. Bajo ese escenario, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, siendo el elemento de la inmediatez ineludible obligación, la acción de tutela y su ejercicio deba ser oportuno

y razonable, presupuesto que aquí se cumple dado que, de acuerdo con el material probatorio recaudado y lo informado por la accionada, se logra establecer que la parte actora elevó petición consistente en que se *le realicen los trámites tendientes a expedir el BONO PENSIONAL, de conformidad a la información suministrada por el Ministerio de Defensa –Policía Nacional-, por el período comprendido entre el primero (1) de febrero de mil novecientos setenta y dos (1972) y el seis (6) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975).*

1.4. De otra parte, ha de resaltarse el carácter residual y subsidiario de esta acción, dado que el aparato judicial prevé diversos mecanismos de defensa ordinarios a los que pueden acudir las personas para la protección de sus derechos; en este sentido, el juez de tutela debe observar cada caso concreto y determinar la existencia o no de otro medio judicial que sea idóneo para proteger el derecho amenazado.

En el asunto objeto de análisis, la demandante acude a la acción constitucional para reclamar, conforme lo suplicó en las peticiones, que se le protejan el derecho fundamental de petición, y se le ordene a la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL-ARCHIVO proceda a remitir al accionante, los certificados de tiempo 1, 2 y 3 (B), consecutivo 1299 del veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016), con el fin de remitir los mismos a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- y dar inicio al trámite interadministrativo entre las entidades para la expedición del BONO PENSIONAL, pedimento frente al cual el ordenamiento jurídico no cuenta con un procedimiento eficaz e idóneo, de donde resulta forzoso concluir que para el caso se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad.

2. Conforme a lo expuesto queda claro que el accionante solicita el amparo de su derecho fundamental de petición el cual considera vulnerado con el proceder de la accionada ya que no ha sido resuelta su solicitud presentada bajo el radicado GE2021-022896 consistente en que se le expida certificado de tiempo de servicios laborados, situación

que se encuentra latente por definir y de ahí que estime la vulneración de ese derecho.

2.1 El derecho fundamental de petición, concebido en el artículo 23 de la Constitución Política, dispone que “[*f*]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”.

2.2. A su turno, la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE SUSTITUYE UN TÍTULO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, en su artículo 14, señaló que “[s]alvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (...)”. Sin embargo, en el párrafo de la mentada regla se establece una excepción, la cual consiste en que si eventualmente no es posible dar respuesta a la petición en dicho lapso, se informará tal circunstancia al interesado con exposición de los motivos y el plazo en que será resuelta, el cual no podrá ser mayor al doble del tiempo establecido inicialmente, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales.

2.3. En sentencia T-293 de 2015 la Corte Constitucional determinó “(...) que este derecho comporta las siguientes obligaciones correlativas para la autoridad que recibe la solicitud: (i) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (ii) la respuesta debe producirse dentro del plazo legalmente establecido y en caso de vacío normativo, dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible;<sup>1</sup> (iii) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado; (iv) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;<sup>2</sup> y (v) ante la

---

<sup>1</sup> Sentencia T-481 de 1992; M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

<sup>2</sup> Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.<sup>3</sup>".

3. Descendiendo al caso sub-examine, se tiene que el accionante y de acuerdo con la respuesta dada por la accionada, el día 25 de julio de 2022 le emitió la respuesta a la solicitud que le elevó la parte actora en la que le indicó que procedió a enviarle *certificación electrónica de tiempos laborados CETIL con consecutivo No. 202207800141397000990300 correspondiente al tiempo laborado en la Policía Nacional por el señor Rojas Álvarez, el cual puede ser consultado directamente en la Plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la entidad donde se encuentra realizando sus aportes, en este caso COLPENSIONES, en consecuencia esta certificación reemplaza 1,2, 3(A) y 3(B)*, decisión que le fue debidamente notificada.

Conforme a ello, señaló la accionada que con esa documentación se logra establecer que en el presente asunto se configuró el hecho superado, por lo que el amparo solicitado deberá ser denegado.

3.1. Contrastadas la petición y la respuesta, para el juzgado fluye que, en verdad, esta última atiende todas las inquietudes planteadas por el accionante en su petición y resulta clara y congruente con lo solicitado, de tal suerte que colma todas las garantías que comprende la prerrogativa de petición que contempla el artículo 23 Constitucional, pues claramente se le notificó la respuesta a la dirección por él registrada donde se le informó que procedía a enviarle *certificación electrónica de tiempos laborados CETIL con consecutivo No. 202207800141397000990300 correspondiente al tiempo laborado en la Policía Nacional por el señor Rojas Álvarez, el cual puede ser consultado directamente en la Plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la entidad donde se encuentra realizando sus aportes, en este caso COLPENSIONES, en consecuencia esta certificación reemplaza 1,2, 3(A) y 3(B)*, con lo cual se despeja la duda que planteó el actor de que la accionada no le había

---

<sup>3</sup> Sentencia T-249 de 2001; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

brindado respuesta en cuanto a la expedición de la certificación que le permita definir su estatus de pensionado.

3.2. Así las cosas, concuerda el despacho con la postura de la pasiva en este asunto, en tanto que se logra establecer que en el presente asunto se configuró el hecho superado, sobre el cual la jurisprudencia constitucional ha sostenido:

“(…) cuando durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha dejado de ocurrir. 4 En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha enumerado algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto, con el fin de confirmar si efectivamente se está frente a la existencia de un hecho superado, a saber: **1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.** 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.” 5 (Subrayado y Negrilla fuera del texto original).

A su turno, en Sentencia de Unificación 540 de 2007 dicha Corporación expresó que, “[e]n efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en

---

4 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-488 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Gálvis, T-630 de 2005 Manuel José Cepeda, entre muchas otras.

5 Sentencia T-045 de 2008.

la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.

Así las cosas, al estructurarse el hecho superado en el presente trámite, conlleva a que el amparo constitucional sea negado y así se dispondrá en la resolutive del presente fallo.

En virtud de los argumentos expuestos, el **JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **V. RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** la acción de tutela instaurada por ANÍBAL ROJAS ÁLVAREZ contra la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL-ARCHIVO, por hecho superado.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** esta decisión por el medio más expedito a las partes. Déjese la constancia de rigor.

**TERCERO: ENVIAR** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no ser impugnada. Déjense las constancias pertinentes.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
GLORIA CECILIA RAMOS MURCIA  
Jueza